

O/N 2021
P II
II

41437 ROSA PAHOR
Inf. Parcial I

Buenos Aires , 03 de Octubre de 1.997

Ref. 2336

Consejo Federal de Inversiones

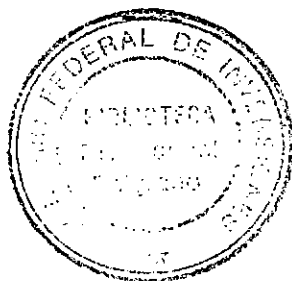
Sr. Secretario General

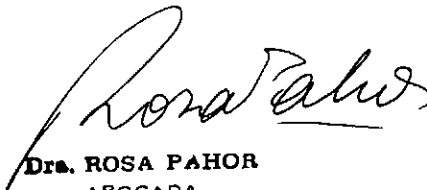
Ing. Juan José Ciásara

S _____ / _____ D.

— Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con el objeto de
hacerle llegar , adjunto a la presente , el Primer Informe Parcial , como corresponde atento
al contrato que oportunamente firmara con el organismo que Ud. Representa .

Sin otro particular , le saludo con mi consideración más
distinguida .




Dra. ROSA PAHOR
ABOGADA
Tº 61 Fº 833 C.P.A.C.F.
Tº 44 Fº 196 C.A.P.B.A.

PRIMER INFORME PARCIAL

- A). Informe sobre las discusiones referente al Impuesto Especial para Pequeños Contribuyentes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación. Exposición de los debates.
- B). Estudio de la repercusión que los distintos sistemas legales de distribución de los Recursos Coparticipables tienen en las Provincias en relación al financiamiento de sus compromisos y responsabilidades a su cargo.
- C). Estudio de los antecedentes del Proyecto de Zona Franca.



Dra. ROSA PAHOR
ABOGADA
Tº 61 Fº 833 C.P.A.C.F.
Tº 44 Fº 196 C.A.P.B.A.

A) Informe sobre las discusiones referentes al Impuesto Especial para Pequeños contribuyentes , en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación . Exposición de los debates.

Debo informar que al respecto , a la fecha , no se realizó el tratamiento del Impuesto Especial para Pequeños Contribuyentes , en Comisión alguna.


En el mes de Septiembre , fue presentado a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación , un Proyecto de Ley de Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes . Autores del mismo , son los Dres. Raúl Vicchi y Víctor M.F. Fayad , ambos Diputados de la Nación. El Proyecto , fue elaborado por un equipo de profesionales, con la coordinación del Diputado Raúl Baglini , y sometido a la consideración de sus pares .

En el mencionado proyecto , se considera pequeño contribuyente a las persona físicas , jurídicas y sucesiones indivisas , que hayan obtenido en el año calendario inmediato anterior , ingresos brutos iguales ó inferiores a Pesos Doscientos Cuarenta Mil (\$240.000).

Se considera Ingreso Bruto al producido de las ventas de bienes, de la realización de obras , de la locación y de la prestación de servicios de las operaciones realizadas por cuenta propia, el precio de los servicios prestados y el resultado de las operaciones por cuenta ajena. Así , los sujeto que encuadren en la condición de pequeño contribuyente , podrán inscribirse en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes "RS" .

La inscripción en el RS implica el pago de los siguientes impuestos y recursos de la seguridad social : Impuesto a las Ganancias ; Impuesto al Valor Agregado ; La contribución a cargo del empleador al SIJP ; El aporte como trabajador autónomo al SIJP .

El RS `podrá incluir el Impuesto sobre Ingresos Brutos que aplican las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , siempre que la respectiva Jurisdicción donde se encuentra establecido el pequeño contribuyente inscripto en el RS , se adhiera mediante convenio. Los convenios tendrán como parte al Estado Nacional y a los Estados Provinciales ó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


Dra. ROSA PAHOR
ABOGADA
Tº 61 Fº 833 C.P.A.C.F.
Tº 44 Fº 196 C.A.P.B.A.

El valor a ingresar mensualmente por los pequeños contribuyentes en el RS , resultará de la categoría donde queden encuadrados, para lo cual, se tendrá en consideración los ingresos brutos . En el Régimen , se establecen tres categorías de contribuyentes teniendo en consideración los ingresos brutos anuales , a saber :

I Categoría : \$ 100

II Categoría \$ 600

III Categoría \$ 1200


El pago del tributo a cargo de los pequeños contribuyentes inscriptos en el RS , será efectuado conforme lo disponga la Dirección General Impositiva. Los pequeños contribuyentes que opten por el RS deberán presentar al tiempo de ejercer la opción , una declaración jurada categorizadora.

Se estima que la DGI incluiría en el RS , un potencial de alrededor de 2.000.000 de contribuyentes , garantizando una recaudación cierta y efectiva .

El Proyecto diseña un régimen especial de contratación flexible para los que estén incluidos en el RS , con contratos de hasta 24 meses de duración , sin cargas sociales ni indemnización , salvo el caso de despido anterior al vencimiento del contrato . El RS asegura una contribución al sistema de seguridad social y la posibilidad de cobertura social al trabajador. Respecto del producido de este RS , se prevé una distribución de 20% al ANSES y de un 80% por mecanismo usual de coparticipación a las provincias , con afectación específica a obras de infraestructura , saneamiento y / o programas sociales.

De modo que el proyecto se presenta como de carácter optativo para los comprendidos en el régimen . Se percibe una simplificación tributaria al reunir en un solo tributo , la recaudación de la DGI . Los destinatarios de la opción , son : comerciantes , fabricantes , prestadores de servicio , sociedades de hecho. El RS incrementaría la recaudación al captar contribuyentes que trabajan en negro. Existe facilidad de control para la DGI . Favorece la contratación de personal a las Pymes . Se da la facilidad de pago mensual.

El Proyecto , debió haber considerado la posibilidad de reducir el aporte a pagar por el empleador a medida que contrata mayor cantidad de empleados.



Dra. ROSA PAHOR
BOGADA
Tº 61 Fº 833 C.P.A.C.F.
Tº 44 Fº 196 C.A.P.B.A.

Considero que el establecimiento de tasas fijas según escala de venta , llevaría a especular con la facturación cuando se estime que se está por alcanzar el límite superior de una escala.

El Proyecto no considera actividades con ciclos de ventas fluctuantes , así como tampoco lo hace con las estacionales.

Con el RS , el Fisco no deberá controlar liquidaciones , pero deberá fiscalizar la inclusión correcta ó no dentro del Régimen.

Los legisladores deberán ser prudentes al tiempo de apreciar la conveniencia ó no del RS. Habrán seguramente maniobras de contribuyentes para incluirse en el RS . Ya tenemos un sistema tributario complicado , conflictivo. Y es posible que se creen más problemas de los que se intenta solucionar.



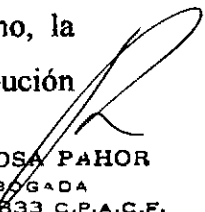
Dra. ROSA PAHOR
ABOGADA
Tº 61 Fº 833 C.P.A.C.F.
Tº 44 Fº 196 C.A.P.B.A.

B). Estudio de la repercusión que los distintos sistemas legales de distribución de los Recursos Coparticipables tienen en las Provincias en relación al financiamiento de los compromisos y responsabilidades a su cargo.

Con la expiración de la vigencia de la Ley 20.221 el 31 de Diciembre de 1.984 , se produjo un vacío legal , en lo que hace a Coparticipación de Impuestos , superándose la situación con la sanción de la Ley 23.548 que instituyó un Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la nación y las Provincias. Estaba dispuesto que la mencionada ley , regiría hasta fines de Diciembre de 1.989 , pero lo cierto es que hasta hoy , se sigue aplicando al hacer uso de su artículo 15 que dispone que la vigencia del régimen se prorroga automáticamente si no se sanciona uno que lo sustituya.

En relación a los impuestos coparticipables , la Ley 23.548 siguió los lineamientos de la Ley 20.221, con algunas modificaciones que consistió básicamente en que todos los impuestos nacionales creados ó a crearse , se coparticipan ; Luego de ello , enumera aquellos que quedan fuera del régimen de coparticipación.

Luego de la sanción de la Ley 23.548, y como consecuencia de Acuerdos y Pactos a los que arribaron la Nación y las Provincias , comienzan a operar detracciones sobre la masa coparticipable , originados en el Acuerdo del 12 de Agosto de 1.992 suscripto entre la Nación y las Provincias , estableciéndose la retención del 15% de la coparticipación para destinarlo al Sistema Nacional de Seguridad Social .Además , se dispuso la retención de un monto fijo para destinarlo al Fondo de Desequilibrios Fiscales Provinciales para ser distribuida entre las Provincias suscriptoras del convenio .Estas acreditaciones mensuales , así como la retención del 15% de la masa , trajo como consecuencia una modificación en la distribución primaria de la coparticipación y también en la secundaria. Por último, la Nación garantizaba a las provincias un monto mínimo de fondos producto de la distribución secundaria de 725 millones.


Dra. ROSA PAHOR
ABOGADA
Tº 61 Fº 333 C.P.A.C.F.
Tº 44 Fº 196 C.A.P.B.A.

El 12 de Agosto de 1.993 , el Poder Ejecutivo Nacional y algunas provincias ,suscribieron el Pacto Federal para el Empleo , la Producción y el Crecimiento. Con posterioridad , lo firmaron las restantes provincias a excepción de Córdoba . Por este pacto , se concertó la política tributaria que implementarían la Nación y las Provincias. Es un acuerdo que va más allá de un vínculo fiscal entre Nación y provincias. Su propósito era producir una reforma tributaria importante , que eliminara los impuestos distorsivos en el orden provincial y nacional, reduciendo el costo laboral. Pero en lo vinculado al régimen de coparticipación , prorrogó la vigencia del Pacto Fiscal del 12 de Agosto de 1.992 hasta el 30/06/95 y elevó el piso garantizado por la Nación a las provincias a 740 millones a partir del 01/01/94.

Mediante el decreto 937/93 , se estableció el reintegro fiscal (con impuestos coparticipables) para las empresas que produjeran y vendieran bienes de capital con destino a actividades económicas ; ello importó una vez más , una detracción de la masa coparticipable, infringiendo la Ley 23.548.

Respecto de la distribución primaria , esto es la formación de los contingentes para la Nación , para las provincias adheridas , para las provincias con recupero del nivel relativo , y para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias está establecido en el art.3º de la Ley 23.548 y prescribe que el monto total recaudado por los gravámenes a que se refiere la Ley , se distribuirá en los siguientes términos :

Nación : 42.34% ; Provincias : 56.66% ; Aportes del Tesoro Nacional : 1%

Pero luego de la provincialización de Tierra del Fuego , el decreto 2456/90 fijó su participación en el 0.388% ; quedó entonces , modificada la distribución primaria en los siguientes términos :

Nación : 41.95% ; Provincias : 57.05% ; Aportes del tesoro Nacional : 1%

Mediante la Ley 24.049 se facultó al Poder Ejecutivo Nacional a transferir desde Enero de 1.992 , a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires, los servicios educativos administrados directamente por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica. En el capítulo "Del Financiamiento" , la ley estableció que hasta tanto se modifique la ley 23.548 , la Secretaría de Hacienda de la Nación retendría de la participación que corresponde a las provincias ,un importe ,previamente a la distribución secundaria, y que la retención tendría como destino el financiamiento

provincial de los servicios educativos transferidos por esa ley y los correspondientes al costo de servicios de Hospitales y de Institutos Nacionales, Programa Social Nutricional a transferir a las provincias.

Por el Acuerdo del 12 de Agosto de 1.992 , y como reconocimiento al esfuerzo realizado por las provincias , la Nación les garantizó un ingreso mensual mínimo en concepto de coparticipación , de \$ 725.000.000. La garantía operaba bimestralmente resultando compensable con los excedentes que se produjeran en el futuro cuando la participación de las provincias superase ese monto. Por el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento , la Nación se comprometió a financiar las pérdidas de recaudación de las provincias con la suspensión de la retención de los montos que excedan la coparticipación por arriba del mínimo acordado de \$ 725.000.000 mensuales como garantía .La ley 23.548 , también ha previsto una garantía anual al establecer que el monto ha distribuir a las provincias , no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento de la recaudación de los recursos tributarios Nacionales de la Administración Central .

Respecto de la distribución secundaria, rige lo dispuesto por la Ley 23.548 y el Decreto 2453/90 que fija la participación de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur , y en especial , el artículo 4º de la Ley de Coparticipación que distribuye el monto de lo recaudado entre las provincias adheridas de acuerdo a porcentajes . Porcentajes que no responden a criterios objetivos de reparto , sino que se recogen coeficientes propuestos por los gobiernos provinciales .

La Ley 23.548 obliga a las provincias adheridas , a establecer un sistema de distribución de ingresos para los municipios de su jurisdicción, el que deberá estructurarse asegurando la fijación objetiva de índices de distribución y la remisión automática y quincenal de los fondos.

Según la Ley 23.548 , los regímenes especiales de coparticipación y la afectación de recursos tributarios a la realización de inversiones, servicios, obras, requieren el acuerdo de la Nación y las provincias y su instrumentación mediante ley nacional con adhesión de las legislaturas provinciales . Pero resulta sorprendente que se haya sancionado la Ley 23.548 que impone la adhesión de las legislaturas provinciales a la ley nacional para excepcionar tributos de la masa coparticipable , para luego sancionar la Ley 23.549 que en el título sexto

crea nuevos impuestos internos con afectación específica , que obvia tal requisito. Esto contribuyó a desarrollar regímenes especiales que contienen a su vez asignaciones específicas.

Así, por el Decreto 879/92 , se realizó una modificación al impuesto a las Ganancias , destinando un 20 % de lo recaudado del impuesto al sistema de seguridad social, reduciendo de esa manera, el porcentaje a distribuir por la Ley 23.548 y sin requerir la adhesión de las provincias a la afectación de los fondos que se sustraen de la masa coparticipable , lo que contraría el sistema dispuesto por la Ley 23.548., pero el Decreto 879/92 , fue ratificado por Ley 24.307 de Presupuesto General para el Ejercicio 1.994 , y por la Ley 24.447 de Presupuesto General para 1.995 .

Referente al Impuesto al Valor Agregado, : se retiene el 11% de lo recaudado con el siguiente destino : 90% para financiar el Sistema de Seguridad Social de la Nación y el 10% para financiar las Cajas de Jubilación provinciales y municipales.

Entre los sistemas que tienen un régimen especial de distribución se encuentra el impuesto a los combustibles y gas natural con un cronograma variable donde la Nación fue disminuyendo su participación a favor de las provincias

Así podemos percibir la maraña compleja que rige la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias. Se Observa el desarrollo anárquico de retenciones, regímenes especiales de coparticipación y mecanismos de afectación específica producto de una lucha constante entre el gobierno central y las provincias para ganar posiciones en la distribución de la renta . Por ello , sería conveniente reevaluar los actuales porcentajes de distribución primaria y suprimir las retenciones de la masa coparticipable , los regímenes especiales y las afectaciones específicas .

Bases para una propuesta

La distribución de funciones, competencias, y servicios , con las correspondientes necesidades de gasto , es lo que se debería tratar en el proceso de estructuración del sector público por niveles de gobierno (gobierno nacional, provincial, y municipal).

Actualmente , el gobierno nacional es responsable del sistema previsional, la educación superior, las relaciones exteriores, las políticas macroeconómicas de estabilización, la defensa nacional y gran parte de las regulaciones de los servicios públicos . Las provincias están a cargo del grueso de la inversión social y de la infraestructura territorial. Los municipios deberían proveer los servicios públicos urbanos.. Pero la delimitación de las responsabilidades de gasto entre los tres niveles de gobierno, no se ha completado.. Pero los gastos de funcionamiento de la administración central no disminuyó como era de esperar luego del proceso de privatización y de la disminución de las funciones sociales, de promoción del sector privado y de inversión pública. Por otra parte, las provincias acrecentaron sus responsabilidades educativas , sanitarias y la inversión en infraestructura.. Es por ello, la demanda de mayores recursos por parte de las provincias. Los porcentajes definidos por la futura Ley correspondientes a la distribución primaria deberían respetarse íntegramente, eliminándose las reducciones específicas sobre la masa coparticipable.

Es decir que referente a la masa coparticipable y a la distribución primaria de la misma, debería mantenerse los impuestos que conforman hoy la masa, y ésta, debería distribuirse en su totalidad. Definidos los componentes de la masa, la distribución primaria entre la nación y las provincias puede hacerse en porcentajes fijos, por criterios discrecionales, ó para determinadas necesidades de gasto. Se podría optar por una distribución primaria realizada sobre la base de porcentajes fijos. Respecto de los ingresos que los gobiernos provinciales reciben en concepto de coparticipación, se debería implementar un régimen de remisión de fondos sin ningún tipo de condicionamientos ; defendiendo esta postura con argumentos de autonomía federal de las provincias y de responsabilidad democrática que recae sobre sus gobernantes..

Según el diseño institucional de nuestro país, las haciendas provinciales se nutren básicamente de tributos propios y de la participación en los rendimientos del sistema impositivo del gobierno central. Así, las haciendas de los gobiernos provinciales deberían responder a un cierto equilibrio de ingresos, que preserve en gran medida la procedencia territorial de los recursos y la autonomía financiera de los gobiernos. La distribución secundaria de impuestos coparticipables debería ayudar a lograr ese equilibrio.

Dos tipos de desequilibrio pueden nacer de las relaciones fiscales entre las unidades de gobierno : el desequilibrio vertical que se produce entre niveles de gobierno (nación-provincias) : se produce como consecuencia de los desajustes entre la distribución vertical de competencias y la distribución vertical de ingresos tributarios potenciales entre niveles de gobierno. Este desajuste vertical es el que impone en nuestro país un régimen como el de coparticipación de impuestos coparticipables, capaz de distribuir los ingresos que recauda el gobierno nacional entre las provincias que delegaron en él la tarea de recaudación.; El desequilibrio fiscal horizontal ,que se produce entre unidades de un mismo nivel , básicamente entre provincias, a consecuencia de la falta de correspondencia entre su capacidad fiscal y sus necesidades de gasto . Este tipo de distribución igualatoria o pereguatoria , está destinada a permitir que las provincias más pobres puedan proveer un adecuado nivel de servicios públicos , sin tener que recurrir a tasas impositivas más elevadas que otras provincias. Se busca proveer niveles comparables de servicios con cargas fiscales comparables para los ciudadanos donde quiera que residan.

Respecto de los criterios básicos de reparto , es de destacar que entre los ingresos de carácter general que reciben en coparticipación , aparecen los que responden a un criterio devolutivo : (La aplicación de un criterio devolutivo busca distribuir los ingresos en base a lo recaudado en cada jurisdicción). ; y aquellos relacionados con criterios niveladores o pereguatorios. Estos dos tipos de criterios están presentes en la Constitución Nacional, que impone la necesidad de que la distribución de los impuestos coparticipables se efectúen sobre la base de criterios objetivos de reparto , y que sea a la vez , equitativa, solidaria, y de prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida, e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. La aplicación de un criterio devolutivo , busca distribuir los ingresos en base a lo recaudado en cada jurisdicción. Ante la carencia de esta información , puede aplicarse en base a la capacidad económica de cada Estado para recaudar tributos.

Otro criterio básico , es la distribución en base a la población. Este procedimiento iguala la coparticipación per capita recibida por cada provincia. Esta forma de distribución contiene un elemento nivelador , ya que beneficia a las provincias con un menor PBI por habitante , restándole a los Estados más ricos . Este aspecto ayuda a comprender el hecho de que las

diferencias relativas que surgen de comparar la distribución actual con la de distribución en base a la población , son menos pronunciadas.

Sería posible introducir cambios que mejoren el uso de las variables con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos por la Constitución . Primero, a partir de la distribución de fondos coparticipables, sería deseable que se equiparen los ingresos fiscales potenciales, esto es propios y recibidos por la Nación, por habitante en cada jurisdicción . Con este fin, la población puede ser ponderada por algún índice que refleje la dependencia financiera de cada provincia con relación a los fondos provenientes de la Nación; situación que se presenta cuando los ingresos provinciales potenciales resultan insuficientes para encarar las responsabilidades del gasto local. Partiendo de esta premisa, se puede calcular un factor de ponderación capaz de reflejar el grado de dependencia financiera de cada provincia (igual a los recursos corrientes de jurisdicción nacional , dividido en el total de recursos corrientes) . El resultado que se obtiene al ponderar la población por este factor es el de igualar los ingresos per capita (propios y nacionales) en las distintas provincias. Ante la carencia de información relativa a los ingresos potenciales propios de cada provincia, el cálculo se puede realizar en base a datos de recaudación efectiva de las provincias durante el año..

La mejor forma de estimar el concepto de brecha de desarrollo es partiendo de los datos del PBI per capita de cada provincia para construir un índice que se calcula, por ejemplo, sobre la base de la comparación del PBI por habitante de cada Estado con el promedio nacional.

A los fines de estimar la distribución de fondos que surgiría de aplicar el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas ponderado por la población de cada provincia, se toman los datos de encuestas permanente de hogares; las participaciones que resultan con esta metodología son equivalentes a calcular un mapa de la pobreza puesto en términos porcentuales. Como tales, solo pueden ser usados con propósitos redistributivos, ya que no guardan relación directa con los objetivos de la prestación de servicios públicos equivalentes por parte de distintos Estados.

La alternativa de distribución secundaria que se propone, juega un papel importante, el criterio basado en el grado de dependencia financiera de las provincias con problemas de desequilibrio vertical. Así, el sistema de coparticipación resulta unido al régimen de

impuestos provinciales permitidos, ya que cualquier cambio sustancial en ellos, provocará cambios significativos en los ingresos por coparticipación percibido por muchas provincias. Dado ello, sería importante además de lograr la aprobación del nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos de alcance nacional , que se logre un acuerdo global entre las provincias sobre impuestos provinciales homogéneos que no resulten distorsivos desde el punto de vista de la eficiencia económica.

Para dotar al sistema impositivo nacional de seguridad y previsibilidad , una vez obtenidos estos acuerdos , la vigencia de los mismos, no debería ser menos a seis años. Considerándose importante, una revisión periódica del sistema impositivo .

C) Estudio de los antecedentes del Proyecto de Zona Franca Salta

Las zonas francas tienen como finalidad, de acuerdo a la Ley 24.331 , impulsar el comercio y las actividades industriales de exportación para promover la inversión y el empleo ..Para ello, se busca el aumento de la eficiencia y la disminución de costos, mediante la concentración de actividades complementarias, desgravaciones impositivas y ventajas arancelarias.

En la zona franca pueden desarrollarse tareas de almacenaje, comerciales, de servicios e industriales; estas últimas con el objeto de exportar la mercadería resultante a terceros países. También se pueden producir bienes de capital que no registren antecedentes de fabricación en el país, para ser “exportados” al resto del territorio nacional, bajo los regímenes arancelarios y tributarios vigentes.

El principio general que rige el movimiento de mercaderías desde y hacia la zona franca, es que toda mercadería que ingrese a la zona franca se considera como una “importación” desde el punto de vista del usuario de la zona franca. A la inversa, toda mercadería que sale de la zona franca se considera una “exportación” . Todas las transacciones comerciales realizadas con la región aduanera general (resto del país, excluidas las otras zonas francas) estará sujeta a los aranceles, reembolsos e impuestos correspondientes que rijan a nivel nacional y/o provincial.

Ventajas de radicarse en la zona franca :

- a) **Exenciones arancelarias:** Los productos transados con terceros países no están sujetos al esquema arancelario para importación y exportación. Sí estarán sujetas a él las mercaderías transadas con el resto del país excluidas las otras zonas francas (territorio aduanero general). Por ello, las empresas radicadas en la zona franca no pagan tributos por la compra de insumos o bienes de capital importados.
- b) **Exenciones impositivas :** Las actividades que se realizan dentro de la zona franca están exentas de los impuestos nacionales, provinciales y municipales, salvo las tasas

vinculadas a prestaciones efectivas. Esta ventaja es esencial dada la conocida incidencia de los impuestos en los costos de producción. La provisión de servicios dentro de la zona franca, está totalmente desregulada y no está sujeta a ningún tipo de impuesto nacional ni provincial.

- c) Parque industrial : La zona franca reúne todas las ventajas de los parques industriales, donde se concentran diversas actividades, muchas de ellas complementarias, en un espacio reducido.

Una de las principales ventajas es la posibilidad de adquirir bienes de capital sin aranceles ni impuestos. Esto implica el ahorro en la inversión de un arancel promedio de 14% más los costos financieros de pago al contado del I.V.A. (27% para la importación).

Es de mencionar que el paquete fiscal implementado en Septiembre de 1996, incluyó la eliminación de los regímenes de exención de impuestos y aranceles para la importación de bienes de capital y plantas llave en mano. Esto hace ventajosa la inversión dentro del área de zonas francas.

El negocio de concesión de una zona franca

La concesión de la zona franca, es un negocio básicamente inmobiliario. La concesión es por 30 años y el concesionario tendrá a su cargo la administración de terrenos y facilidades de la zona franca, brindando diversos servicios a los usuarios. Por ello cobrará a las industrias radicadas distintas tarifas por servicios de acuerdo a lo que proponga en la oferta técnica.

Entre las tarifas por servicios que podrá cobrar el concesionario se pueden mencionar :

- Renta de terrenos.
- Uso de almacenes y patios públicos
- Derechos de incorporación de usuarios y gastos administrativos.
- Visación de documentos.
- Uso de instalaciones y locales.

- Servicios complementarios.

Tendrá la obligación de realizar las obras y proveer los equipos siguientes :

- Construcción de mejoras físicas del terreno, playas, tinglados, locales, depósitos, etc.
- Infraestructura : pavimentos, vías férreas, playas, alambrados, cercos, accesos, balanza, alumbrado público, red de electricidad, gas, telefonía, agua potable, agua industrial, red cloacal, etc.
- Equipos de elevación y transporte : grúas, vehículos de transporte o vigilancia, herramientas, maquinarias para el movimiento de mercaderías, etc.

Finalmente, el concesionario será el encargado de la fiscalización aduanera, debiendo rendir cuentas a la Administración General de Aduanas.

Canon a abonar a la provincia

El concesionario deberá abonar a la provincia de Salta, un canon determinado como porcentaje de la facturación bruta mensual. Este porcentaje formará parte de la oferta económica para el proceso de licitación.

Monto requerido de inversión

El monto de inversión formará parte de la oferta económica para el proceso de licitación. Esta última, será evaluada según el monto previsto de inversión y el cronograma de ejecución de las obras. El valor del proyecto se descontará a una tasa del 12%.

La inversión requerida para el buen desempeño de la zona franca, dependerá esencialmente de la cantidad de usuarios directos y hectáreas solicitadas, y de la naturaleza de las actividades que éstos vayan a desarrollar. Además, dependerá también de la futura evolución del negocio.

En cuanto a los **requisitos** que se exigen en el pliego (versión preliminar), existen dos etapas de inversión requerida :

1.- Puesta en funcionamiento : Esto es la disponibilidad de infraestructura, servicios básicos y operativos de zona franca que satisfagan las necesidades de los potenciales usuarios. Plazo máximo : 18 meses. Monto mínimo previsto :US\$2.000.000

2.- Construcciones (edilicias y de infraestructura en servicios) y equipos : Los primeros cinco años a partir de la firma del contrato de concesión. No existe un monto mínimo requerido.

Los montos de inversión serán comprometidos por el oferente en la oferta económica y constituirán, junto con el cronograma de obras, un elemento importante para la calificación de dicha oferta.

PROVINCIA DE SALTA

La provincia de Salta ocupa una superficie de 155.368 Km², y representa el 5.6% de la superficie continental.. Limita al Norte con la provincia de Jujuy y con Bolivia ; al Sur, con las provincias de Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero ; al Este , con Chaco, Formosa y Paraguay ; al Oeste, con Chile .

Se divide políticamente en 23 departamentos y 59 Municipios, siendo la población total estimada de alrededor de 985.000 habitantes .

Al tratarse del tema de la zona franca, se determinó que había dos posibles ubicaciones para la misma : La ciudad de General Mosconi en el departamento de San Martín y la ciudad de General Güemes en el Departamento del mismo nombre. Ambas son importantes localidades.

La población por departamentos es de :

Salta (capital)	420.000 habitantes ; siendo la superficie de :	1.730 Km ²
General San Martín	118.000 habitantes	superficie : 15.595 Km ²
General Güemes	38.100 habitantes	superficie : 2.210 Km ²

Ubicación relativa de la Zona Franca Salta

La zona franca estará ubicada en General Güemes ó en General Mosconi. Los candidatos a concesionario optarán entre una u otra de acuerdo a su anteproyecto técnico.

Una de las localizaciones posibles está a solo dos kilómetros de la ciudad de General Güemes. Ocupa un predio de doscientas hectáreas delimitado por las vías del Ferrocarril General Belgrano al este y la ruta Nacional 34 al oeste.

La otra ubicación posible está cercana a la ciudad de General Mosconi, sobre la ruta Nacional 34.

La estratégica ubicación geográfica de la Zona Franca Salta, sumada a su moderna infraestructura de servicios y transporte, permite acceder fácilmente a los mercados más dinámicos para las exportaciones Argentinas como Chile y el este Asiático. También permite desarrollar mercados que en la actualidad tienen baja participación como Bolivia y la costa oeste de Estados Unidos.

La Zona Franca Salta está emplazada en el corazón de la red vial y ferroviaria que une el Atlántico con el Pacífico, y el sur con el norte, conectando los importantes puertos y ciudades.

De este a oeste, los corredores viales y ferroviarios Atlántico – Pacífico , unen los puertos de Santos (Sao Paulo, Brasil), Rio Grande y Porto Alegre Río Grande Do Sul) y la ciudad de Curitiba con los puertos de Antofagasta, Mejillones, Tocopilla e Iquique a través de los pasos de Sico y Socompa.

De sur a norte, el ferrocarril General Belgrano une el puerto más importante del país, Buenos Aires, con Bolivia, pasando por Santa Fe, Córdoba, Tucumán, San Luis y San Salvador de Jujuy. Paralela al ferrocarril, se extiende la ruta Nacional 9/34 uniendo las mismas ciudades.

Uno de los aspectos fundamentales que justifican la elección de un emplazamiento son las facilidades que el mismo ofrece en cuanto a comunicaciones. La provincia de Salta ofrece una moderna infraestructura de transporte ; y tanto la capital como la ciudad de General Güemes, se sitúan en el núcleo del corredor vial y ferroviario Atlántico – Pacífico. Esta

ubicación facilita la interconexión del Noroeste Argentino con los mercados que integran el Mercosur y especialmente con Chile y Asia.

.INFRAESTRUCTURA VIAL

A Chile

Las posibilidades de acceso a los puertos chilenos las ofrecen dos rutas que corresponden a los pasos de frontera habilitados : Sico en Salta con acceso por la ruta Nacional 51 y Jama en Jujuy por la ruta Provincial 16.

Desde estos pasos, el acceso a los puertos mencionados se efectúa por San Pedro de Atacama, continuando hasta Calama; punto donde se opta por continuar a Iquique al norte, a Tocopilla, ó a Antofagasta y Mejillones al sur.

Actualmente, se está construyendo una ruta directa Antofagasta – frontera en Sico, financiada en gran parte con las empresas mineras. Esta ruta evitará pasar por San Pedro de Atacama y Calama, reduciendo el trayecto unos ciento cincuenta kilómetros.

A Paraguay

La ruta Nacional 81 recorre de oeste a este el norte Argentino paralelamente a la frontera con Bolivia y Paraguay.

Se extiende desde Senda Hachada, en el empalme con la ruta Nacional 34, hasta la ciudad de Formosa a orillas del Río Paraguay y se une con la ruta Nacional 11 que llega hasta Asunción (Paraguay).

A Bolivia

La ruta Nacional 9 une Buenos Aires con la Quiaca y Villazón (Bolivia) pasando por General Güemes. En la frontera empalma con la ruta boliviana que conduce a las ciudades de Tarija, Potosí, La Paz y el límite con Perú.

La ruta Nacional 34 tiene su origen en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Cruza la provincia DE Santiago del Estero, Tucumán, General Güemes, este de Jujuy y llega a Pocitos (Salta) donde empalma con la ruta boliviana, pasando por Yacuiba y llegando a Santa Cruz

A Brasil

Porto Alegre y Rio Grande do Sul : Ruta Nacional 16 hasta la ciudad de Resistencia donde se cruza el río Paraná hasta la ciudad de Corrientes. Luego la ruta Nacional 12 al sur hasta la ruta Nacional 123 que empalma con las rutas brasileñas a Porto Alegre y Rio Grande.

Curitiba, Sao Paulo y Puerto de Santos : Ruta Nacional 34 hasta Senda Hachada, luego ruta Nacional 81 hasta la ciudad de Formosa, ruta Nacional 11 hasta Asunción (paraguay) y desde allí por las rutas paraguayas y brasileñas hasta Santos, pasando por Curitiba y Sao Paulo.

Infraestructura ferroviaria

La región del norte Argentino está conectada por la Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A., sociedad de capital estatal. Es un ferrocarril de trocha angosta (métrica) en el cual se identifican dos corredores para acceder a los puertos de Rosario y Buenos Aires.

Corredor Avia Terai (Pcia. De Chaco)

Al sur desde Avia Terai pasando por Gral. Pinedo, Tostado, Santa Fe, Rosario, terminando en Buenos Aires (Terminal Retiro).

Corredor Córdoba

Saliendo desde Tucumán pasa por Lamadrid, Frias, Recreo, Dean Funes, Córdoba, San Francisco, Rosario, terminando en Buenos Aires (Terminal Retiro). Gran parte de su recorrido lo hace paralelamente (aproximadamente a 30 Km de distancia) de las vías de trocha ancha del Nuevo Central Argentino, ex Ferrocarril Mitre.

Conexiones ferroviarias : Atlántico – Pacífico

Argentina – Chile por Socompa : La trocha angosta del Belgrano se conecta con la trocha angosta de Ferronor, donde hay dos estaciones ferroviarias, una argentina y otra chilena, con una playa en común.

Argentina – Bolivia por Pocitos (Arg) / Yacuiba (Bol) : conecta la trocha angosta del ferrocarril Belgrano con la Red Oriental de ENFE (Bol).

Argentina – Brasil por Paso de los Libres (Arg) /Uruguaiana (Brasil) : conecta la trocha media del ferrocarril Urquiza en Paso de los Libres con la trocha angosta del ferrocarril brasileño en Uruguaiana a través del Puente Internacional sobre el río Uruguay.

Corredores ferroviarios Atlántico – Pacífico

Via Zona Franca Salta

País	Recorrido	Km
Chile	Antofagasta – Victoria – Socompa	334
Argentina	Socompa – Salta – G. Güemes – G. Mosconi – Pocitos	987
Bolivia	Yacuiba – Sta. Cruz de la Sierra – Pto. Suarez	1.190
Brasil	Corumba – Cpo. Grande – Bauru – S.Pablo – Santos	1.834
Longitud total del corredor		4.345

Via ciudad de Salta

País	Recorrido	Medio	Km.
Chile	Antofagasta – Victoria – Socompa	FF.CC	334

Argentina	Socompa – Salta – Resistencia	FF.CC	1.421
	Resistencia – Corrientes	Carretera	15
	Corrientes – Paso de los Libres	FF.CC	452
Brasil	Uruguaiana – Río Grande	FF.CC	734
Longitud total del corredor			2.956

El corredor Antofagasta – Río Grande , que pasa por la ciudad de Salta es el de menor recorrido. A esto se le suma el mérito de conectar el Océano Pacífico, el norte Argentino, la hidrovía y el Océano Atlántico.

La desventaja que presenta este corredor es que utiliza tres medios de transporte : ferrovía de trocha angosta, ferrovía de trocha media y carretera. Es posible con baja inversión colocar un tercer riel en el interior de la trocha media de la línea Urquiza, que une Corrientes con Paso de los Libres (Arg.)/Uruguaiana (Bra.), para llegar al puerto de Río Grande en Brasil. Esto complementado con la construcción del puente ferroviario Resistencia – Corrientes (Proyecto del CERETRA) servirá para optimizar el corredor transformándolo en una de las opciones más ventajosas.

Infraestructura aeroportuaria

General Güemes se encuentra muy cercano de los aeropuertos internacionales “El Aybal” (Salta), y “El Cadillal” (Jujuy) ; siendo la distancia aproximada de cincuenta kilómetros. Ambos aeropuertos se encuentran habilitados para operación de grandes aviones a reacción de pasajeros y de carga.

En las cercanías del emplazamiento propuesto, se dispone de una pista de 2.000m. de terreno natural y de instalaciones del aeroclub local, las que podrían ser adaptadas, a un bajo costo, para operaciones de aeronaves ejecutivas.